



Asamblea General

Distr. general
29 de febrero de 2012
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 61º período de sesiones (29 de agosto a 2 de septiembre de 2011)

Nº 48/2011 (Indonesia)

Comunicación dirigida al Gobierno el 25 de mayo de 2011

Relativa a: Filep Jacob Samuel Karma

El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido por la antigua Comisión de Derechos Humanos mediante su resolución 1991/42. El mandato del Grupo de Trabajo fue aclarado y prorrogado por la Comisión en su resolución 1997/50. El Consejo de Derechos Humanos asumió el mandato en su decisión 2006/102. El mandato fue prorrogado por tres años mediante la resolución 15/18 del Consejo, de 30 de septiembre de 2010.

2. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en detención de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y, además, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pertinentes instrumentos internacionales aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de la libertad constituye una violación del derecho internacional por motivos de discriminación basada en el nacimiento, el origen nacional, étnico o social, el idioma, la religión, la condición económica, la opinión política o de otra índole, el género, la orientación sexual, la discapacidad u otra condición, y tiene por objeto hacer caso omiso de la igualdad de derechos humanos o puede causar ese resultado (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

3. Filep Jacob Samuel Karma es un ciudadano indonesio que reside habitualmente en Jayapura City. Es un activista de los derechos humanos y antiguo funcionario indonesio del Departamento de Educación y Formación.

4. En julio de 1998, el Sr. Karma participó en una izada de banderas ceremonial en su localidad natal de Biak. El Sr. Karma resultó herido en las piernas por balas de goma disparadas por el ejército indonesio y fue detenido, acusado de sedición y declarado culpable. Fue condenado a seis años y medio de cárcel. El 20 de noviembre de 1999 fue puesto en libertad de resultas de un recurso de apelación..., tras haber cumplido un año y medio de condena.

5. El 1º de diciembre de 2004, en Trikora Field, Abepura, provincia de Papua, el Sr. Karma fue detenido por la policía nacional cuando se encontraba organizando y participando en una ceremonia en que se celebraba la independencia del dominio neerlandés. La ceremonia congregó a varios centenares de papuanos que profirieron gritos de "libertad", repitieron eslóganes de rechazo al estatuto de autonomía especial de Papua e izaron la bandera del Lucero del Alba, símbolo de la independencia de Papua. Cuando la policía intentó retirar la bandera a la fuerza y dispersar la manifestación, los participantes protestaron lanzando trozos de madera, piedras y botellas. La policía respondió disparando contra la multitud. El Sr. Karma fue uno de los detenidos. No se le mostró ninguna orden de detención.

6. El 2 de diciembre de 2004, el fiscal del distrito de Jayapura imputó al Sr. Karma presuntas violaciones de los artículos 106, 110, 154 y 155 del Código Penal de Indonesia. El fiscal solicitó cinco años de cárcel para el Sr. Karma.

7. Según la fuente, inicialmente el Sr. Karma fue recluido en la comisaría de policía de Jayapura durante la celebración de su juicio en 2005. Posteriormente fue trasladado a la cárcel de Abepura a mediados de 2005. En diciembre de 2010 lo transfirieron a la comisaría de policía de Jayapura. El 7 de marzo de 2011, el Sr. Karma fue trasladado de nuevo a la cárcel de Abepura.

8. El 26 de mayo de 2005, el Tribunal de Distrito de Jayapura declaró culpable al Sr. Karma de sedición, conspiración para cometer sedición y delitos contra el orden público (caso N° 21/PID/2005/PT.JPR, 11 de julio de 2005). Fue condenado a 15 años de cárcel, condena tres veces mayor que la que solicitaba el fiscal. El Tribunal Superior de Jayapura y el Tribunal Supremo de Indonesia ratificaron la sentencia el 11 de julio de 2005 y el 27 de octubre de 2005, respectivamente.

9. La fuente afirma que el encarcelamiento del Sr. Karma vulnera los derechos que lo amparan en virtud de la Constitución de Indonesia. El artículo 28 e) de la Constitución dispone que "toda persona tiene el derecho de ser libre en sus convicciones y expresar

sus pensamientos y principios conforme a su conciencia". También establece que "toda persona tiene el derecho de asociarse, reunirse y expresar sus opiniones libremente". El artículo 28 i), párrafo 1, estipula que "los derechos a la vida, a mantenerse a salvo de la tortura, a la libertad de pensamiento y de conciencia, a profesar una religión, a no ser esclavizado, a ser tratado como individuo ante la ley y a no ser enjuiciado en virtud de legislación retroactiva son derechos humanos fundamentales que no serán restringidos en ninguna circunstancia".

10. La fuente hace referencia a la decisión N° 6/PUU-V/2007, de 17 de julio de 2007, en que el Tribunal Constitucional de Indonesia dictaminó que los artículos 154 y 155 del Código Penal, en virtud de los cuales fue encausado el Sr. Karma, son inconstitucionales y no tienen efecto jurídico vinculante.

11. El acto de izar la bandera del Lucero del Alba constituye, según la fuente, un acto de libertad de expresión, puesto que la bandera es un símbolo que utilizan los papuanos para celebrar su independencia del dominio neerlandés. El artículo 2, párrafo 2, de la Ley de autonomía especial dispone expresamente que "la provincia de Papua puede tener símbolos regionales como estandarte de su esplendor y grandeza y símbolo cultural de la grandeza de la identidad papuana en forma de bandera regional e himno regional que no serán considerados símbolos de soberanía".

12. La fuente alega que la detención y privación de libertad del Sr. Karma son resultado de su ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación consagrados en los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Si bien Indonesia no se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hasta febrero de 2006, después de que se dictara la sentencia del Sr. Karma, la fuente sostiene que su privación de libertad posteriormente a la adhesión al Pacto por actos protegidos por el Pacto constituye un quebrantamiento del Pacto, y concretamente del artículo 19, párrafos 1 y 2, el artículo 21 y el artículo 22.

13. La fuente también informa de que no se respetaron las garantías mínimas debidas al Sr. Karma en virtud del derecho a un juicio imparcial, y que el incumplimiento es de tal gravedad que equivale a privación arbitraria de libertad. Se hace referencia a varias declaraciones atribuidas al juez de primera instancia, que presuntamente vulneraron la imparcialidad judicial prescrita en el artículo 158 del Código Penal de Indonesia. Al parecer, el juez profirió comentarios despectivos al Sr. Karma y su abogado, como por ejemplo "si Filep se porta mal, péguele en la cabeza" y "no mencione a su Dios aquí, su Dios murió hace mucho tiempo" (véase asunto penal N° 04/Pid.B/2005/PN-JPR, testimonio de Filep Karma, exposición de defensa de los asesores legales del acusado, en nombre de Filep Karma, pág. 7; exposición de apelación de los asesores legales del acusado, en nombre de Filep Karma, págs. 4 a 6). El abogado del Sr. Karma presentó una excepción procesal alegando parcialidad del juez, que posteriormente fue desestimada. La defensa tampoco logró el reconocimiento de que se había denegado injustamente al Sr. Karma el acceso a su abogado contraviniendo los artículos 54 y 198, párrafo 2, del Código de Procedimiento Penal, debido a que el tribunal de primera instancia inició el proceso el 10 de mayo de 2005, sin advertir con suficiente antelación al abogado del Sr. Karma.

14. Según la información recibida, se denegó indebidamente al Sr. Karma el acceso a un recurso de apelación contra la sentencia y condena del tribunal de primera instancia. La fuente sostiene que el recurso de apelación del Sr. Karma se desestimó porque el tribunal de primera instancia no trasladó los documentos relativos a su caso al Tribunal Superior. Según la fuente, el Tribunal Supremo de Indonesia no ofreció reparación para esta violación de los artículos 67 y 244 del Código de Procedimiento Penal de Indonesia, que garantizan el derecho del acusado al recurso de apelación. En este contexto, la fuente alega que las normas internacionales mínimas consagradas en el derecho a un juicio imparcial no se han respetado.

15. El Sr. Karma sufre de problemas de la próstata que recientemente hicieron necesaria una intervención quirúrgica así como lesiones en las piernas y la espalda y trastornos respiratorios crónicos. La fuente señala que su salud se ha deteriorado desde que está recluido. Esos problemas empeoraron en 2009. En octubre de 2009, los médicos del hospital de Dok Dua a los que se permitió que vieran al Sr. Karma recomendaron que los funcionarios de la prisión de Abepura lo enviaran inmediatamente a Yakarta para someterlo a cirugía urológica. No fue hasta julio de 2010 que el Sr. Karma fue transferido a un hospital de Yakarta para recibir reconocimiento médico y tratamiento quirúrgico. Su estado físico todavía empeoró a raíz de un incidente acaecido el 3 de diciembre de 2010 en la cárcel de Abepura, cuando varios prisioneros intentaron escapar. Compañeros de prisión del Sr. Karma le pidieron que los representara en las negociaciones con los oficiales de prisiones para evitar más violencia. Poco después, el Sr. Karma fue trasladado a la comisaría de policía de Jayapura, cuyas deficientes condiciones, entre otras la escasez de alimentos y la presencia de ratas, contribuyeron a que se deteriorara todavía más su estado de salud. El 7 de marzo de 2011, el Sr. Karma fue trasladado de nuevo a la cárcel de Abepura. Habida cuenta de la supuesta denegación y demora del traslado del Sr. Karma por motivos de salud, pese a la recomendación de los médicos, la fuente sostiene que las autoridades indonesias vulneraron el artículo 22, párrafo 2, de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Las Reglas establecen que "[S]e dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales civiles".

Respuesta del Gobierno

16. El Grupo de Trabajo remitió su comunicación al Gobierno el 6 de junio de 2011, y lamenta que el Gobierno no haya suministrado la información solicitada. El Grupo de Trabajo habría agradecido la cooperación del Gobierno.

Deliberaciones

17. De conformidad con sus métodos de trabajo revisados, el Grupo de Trabajo está en condiciones de emitir una opinión basada en lo que le ha sido expuesto.

18. El asunto que tiene ante sí el Grupo de Trabajo es la reclusión del Sr. Karma. Se trata del segundo período de reclusión, iniciado en 2004, que ha sido señalado al Grupo de Trabajo. La primera cuestión consiste en saber si este segundo período de reclusión es resultado de una sentencia o condena por haber ejercido el Sr. Karma el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación. La segunda cuestión es si se ha observado o no el derecho del Sr. Karma a un juicio imparcial.

19. El Grupo de Trabajo examinó el primer período de reclusión del Sr. Karma y las circunstancias del caso en el informe de su visita a Indonesia de 1999 (véase E/CN.4/2000/4/Add.2). El Grupo de Trabajo indicó lo siguiente:

[64.] Otro grupo de personas se encuentran en espera de juicio en Biak, tras un acto de izada de banderas en julio de 1998 en el que los participantes fueron dispersados por las fuerzas de seguridad. Del 2 al 6 de julio de 1998, se produjeron manifestaciones públicas en el centro de salud comunitaria próximo a Biak Port, donde se congregó un grupo de personas, encabezado por Filip Jakob Samuel Karma, empleado del Gobierno regional, para pedir la independencia de la provincia. En la madrugada del 6 de julio de 1998, las tropas abrieron fuego contra cientos de manifestantes desarmados y detuvieron a más de 100, que en su mayoría fueron puestos en libertad poco después. Las personas que actualmente esperan su juicio fueron detenidas sin una orden de detención y a todas se les inculpó en virtud del artículo 106 del Código Penal; además, a muchas se les podrían imputar otros cargos en virtud del artículo 154 del Código Penal. En la detención de esas personas,

que en muchos casos fueron interrogadas sin la presencia de un representante legal, intervinieron fuerzas militares.

[65.] Según la información recibida, el Grupo de Trabajo considera que la mayoría de las personas que han sido acusadas en relación con los actos mencionados de izada simbólica de banderas fueron detenidas por haber ejercido las más de ellas pacíficamente sus creencias y que su detención es arbitraria según la categoría II de los métodos de trabajo del Grupo.

20. El Grupo de Trabajo también expresó inquietud sobre las disposiciones del Código Penal relativas a la seguridad nacional:

[50.] Esas disposiciones figuran en cuatro capítulos del libro II del Código Penal y se refieren a: Delitos contra la seguridad del Estado (cap. I, arts. 104 a 129); Delitos contra la dignidad del Presidente y del Vicepresidente (cap. II, arts. 130 a 139); Delitos contra el orden público (cap. V, arts. 154 a 181); Delitos contra la autoridad pública (cap. VIII, arts. 207 a 241). La mayoría de esas disposiciones están redactadas, sobre todo por lo que respecta al elemento intencional del delito, en términos tan generales y vagos que pueden utilizarse arbitrariamente para restringir la libertad de opinión, de expresión, de reunión y de asociación. En particular, pueden usarse contra la prensa, las actividades pacíficas de oposición política y los sindicatos, como ocurrió a menudo en los regímenes anteriores.

[51.] En este contexto, merecen especial atención los artículos 154 a 157 (que incluyen algunas disposiciones del período colonial), en los que se tipifican como delitos los actos que expresan "sentimientos de hostilidad, odio y desacato contra el Gobierno de Indonesia" (art. 154). Otra disposición de ese tipo es el artículo 137 (relativo al delito de "lesa majestad"), en el que se condenan los insultos contra el Presidente y el Vicepresidente. Esas disposiciones se utilizan a menudo para neutralizar o intimidar a la oposición política o a los miembros de sindicatos. La mayor parte de las personas detenidas y enjuiciadas en virtud de esos capítulos del Código Penal durante el régimen del Presidente Suharto ya han sido puestas en libertad. Sin embargo, esas disposiciones siguen vigentes y entrañan un grave riesgo de detenciones arbitrarias, puesto que no han sido derogadas ni se ha modificado su contenido para que sean conformes con las normas internacionales que garantizan la libertad de opinión y de expresión.

21. El Grupo de Trabajo también hace referencia a la Observación general N° 29 (2001) del Comité de Derechos Humanos sobre los estados de excepción, en que el Comité establece que toda suspensión basada en motivos de seguridad nacional debe ajustarse a los requisitos de proporcionalidad y necesidad: "el solo hecho de que una suspensión permisible de la aplicación de una determinada disposición pueda de por sí justificarse por las exigencias de la situación no elimina el requisito de que deba mostrarse que las medidas concretas adoptadas como consecuencia de esa suspensión son también necesarias en razón de las exigencias de la situación" (CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, párr. 4). El Grupo de Trabajo también se ha servido de los Principios de Johannesburgo sobre seguridad nacional, libertad de expresión y acceso a la información de 1995, que contienen principios aplicables a la invocación de una excepción por motivos de seguridad nacional.

22. El Grupo de Trabajo adoptará en breve una decisión sobre una cuestión relativa a la aplicación *ratione temporis* y la adhesión de Indonesia al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 2006, después de que se dictara la sentencia del Sr. Karma. En virtud del Pacto, después de la adhesión o ratificación una detención arbitraria no pasa a ser menos arbitraria, por lo que debe ponerse fin a la privación de libertad incluso si la sentencia es anterior a la entrada en vigor. El Grupo de Trabajo agrega también que

ninguna de las cuestiones que se plantean en la presente opinión llevaría a una conclusión diferente si se evaluara sobre la base del derecho internacional consuetudinario.

23. La siguiente cuestión es la legalidad. La detención debe ser conforme a derecho. La fuente alega que la condena vulneró el derecho indonesio. La fuente ha señalado al Grupo de Trabajo un fallo del Tribunal Constitucional de Indonesia en que este dictaminaba que los artículos 154 y 155 del Código Penal, en virtud de los cuales fue encausado el Sr. Karma, son inconstitucionales y no tienen efecto jurídico vinculante (véase la decisión N° 6/PUU-V/2007, de 17 de julio de 2007). La fuente también ha hecho referencia a las disposiciones pertinentes de la Constitución de Indonesia. La fuente ha suministrado sólidos indicios de que la detención no fue conforme al derecho indonesio. El Grupo de Trabajo no necesita dictaminar sobre el cumplimiento del derecho indonesio, puesto que es evidente que la detención supone una violación directa de las obligaciones sustantivas de Indonesia en materia de derechos humanos.

24. En el presente caso, la primera de las dos principales cuestiones es que si la privación de libertad es arbitraria como resultado del ejercicio de los derechos y libertades contemplados en los artículos 19 (Libertad de opinión y de expresión) y 20 (Libertad de reunión pacífica y de asociación) de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 19 (Libertad de opinión y de expresión), 21 (Libertad de reunión pacífica) y 22 (Libertad de asociación) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La fuente ha aportado indicios racionales de que la detención del Sr. Karma se debe a su participación en una ceremonia pacífica de izada de bandera y supone una violación de los derechos enumerados más arriba. El Grupo de Trabajo ha solicitado al Gobierno que le suministre información detallada sobre la situación actual del Sr. Karma y aclare las disposiciones jurídicas que justifican su permanencia en reclusión. A falta de esa información, el Grupo de Trabajo debe basar su opinión en los indicios racionales aportados por la fuente. La detención arbitraria se inscribe en la categoría II de las categorías aplicables a los casos presentados al Grupo de Trabajo.

25. La segunda cuestión principal es si se produjeron violaciones del derecho a un juicio imparcial (artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) de una gravedad tal que confieran a la detención un carácter arbitrario. La fuente ha establecido indicios racionales de que el derecho del Sr. Karma a la apelación fue restringido. El Grupo de Trabajo también hace referencia a la evaluación de su informe de 1999 citado más arriba sobre los delitos de sedición y orden público por los que fue condenado el Sr. Karma. En el informe, el Grupo de Trabajo señaló que "la mayoría de esas disposiciones están redactadas, sobre todo por lo que respecta al elemento intencional del delito, en términos tan generales y vagos que pueden utilizarse arbitrariamente para restringir la libertad de opinión, de expresión, de reunión y de asociación. En particular, pueden usarse contra la prensa, las actividades pacíficas de oposición política y los sindicatos, como ocurrió a menudo en los regímenes anteriores". También recalcó la conclusión de que, "sin embargo, esas disposiciones siguen vigentes y entrañan un grave riesgo de detenciones arbitrarias, puesto que no han sido derogadas ni se ha modificado su contenido para que sean conformes con las normas internacionales que garantizan la libertad de opinión y de expresión". Sobre la base de la información de que dispone el Grupo de Trabajo, el juicio y la condena del Sr. Karma a tenor de las disposiciones mencionadas más arriba también supone una violación de los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La detención arbitraria se inscribe en la categoría III de las categorías aplicables a los casos presentados al Grupo de Trabajo.

26. El Grupo de Trabajo recuerda a Indonesia su obligación de cumplir las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de no practicar la detención arbitraria,

poner en libertad a las personas que hayan sido detenidas arbitrariamente y proporcionarles indemnización. El deber de observancia de los derechos humanos no solo recae en el Gobierno sino en todos los funcionarios, incluidos los jueces, policías y oficiales de seguridad, así como los funcionarios de prisiones competentes.

Decisión

27. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad del Sr. Karma es arbitraria, constituye una vulneración de los artículos 9, 10, 11, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14, 19, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se inscribe en las categorías II y III de las categorías aplicables a los casos presentados al Grupo de Trabajo.

28. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno de Indonesia que adopte las medidas necesarias para remediar la situación, en particular la inmediata puesta en libertad del Sr. Karma y el otorgamiento al Sr. Karma de la debida indemnización.

[Aprobada el 2 de septiembre de 2011.]
